

C.A. de Santiago

Santiago, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

El abogado Pablo Andrés Giuliucci Grayde, defensor penal privado, en causa RUC 2201312122-8, RIT 1-108-2023, seguida ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, ha interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés por la cual –en cuanto interesa– se condenó a BRYAN IVÁN JARAMILLO ARAYA a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, previsto en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la Ley Nro. 20.000, acaecido el día 28 de diciembre de 2022.

No se le impusieron costas y, por no reunirse los requisitos legales para ello, tampoco se le concedió al sentenciados ninguna de las penas sustitutivas de la Ley Nro. 18.216, por lo que deberán cumplir real y efectivamente las sanciones corporales decretadas, sirviéndoles de abono los días que ha estado sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, en forma ininterrumpida, esto es, desde el día 28 de diciembre de 2022 a la fecha, totalizando a la data de la sentencia de primera instancia doscientos cincuenta y un días (251), según consta de certificado emitido por la ministro de fe del Tribunal.

En el mencionado recurso se invocó como causal única la del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por infracción al debido proceso, así como por afectarse los derechos de la defensa durante el juicio. Luego, la Excma. Corte Suprema, una vez recibidos los antecedentes, y por estimar que de la lectura del libelo aparece que los argumentos del arbitrio podrían corresponder más propiamente al motivo de invalidación a que se refiere el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en cuanto se alude a un cuestionamiento a la valoración de los antecedentes y fundamentación de la sentencia. Adiciona la decisión que, asimismo, en lo que al segundo capítulo se refiere, aquello podría ser propio de la causal del artículo 374 letra c) del referido cuerpo legal, es decir, de un cuestionamiento respecto a que las



facultades y derechos de la defensa en sentido amplio se hubiesen visto restringidas o mermadas.

En la audiencia de 7 de noviembre pasado, efectuada para conocer del recurso, a la cual comparecieron tanto la Defensoría como el Ministerio Público, la parte recurrente reiteró los planteamientos consignados en su arbitrio. Se fijó como fecha para la lectura del fallo, la audiencia del día de hoy.

**Considerando:**

**Primero:** Que como se ha consignado en lo expositivo, si bien el representante del acusado ha interpuesto recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 373 letra a) del código procedimental que regla la materia, la Excma. Corte Suprema dispuso revisar por esta Corte de Apelaciones las causales previstas en las letras e) y c) del artículo 374 antes citado. En el arbitrio intentado se postula que el abogado se vio limitado a ejercer su actividad de defensa mientras se llevada a cabo audiencia de juicio oral, situación que, dice, sólo puede subsanarse a través de la anulación del juicio oral que se encuentra viciado.

Refiere el impugnante en su libelo que el fallo censurado incurre en un yerro que determinó que los miembros del Tribunal Oral llegaran, mediante una valoración apartada y claramente torcida, a una convicción de participación que no corresponde con la conclusión que se habría obtenido de una racional e íntegra ponderación de lo expuesto en juicio oral. Lo anterior por cuanto el defensor se vio privado a su ejercicio de defensa en el transcurso del juicio oral. Así, explica que en la audiencia de juicio oral celebrada el día 23 de agosto de 2023, mientras ejercía –como abogado del encartado– su derecho a interrogar a la otra acusada de autos Alianys Baddoour Rondon, la defensora pública que la representa, Carolina Fabiola Zúñiga Ponce, intentó objetar dos preguntas realizadas por él, no obstante, la magistratura permitió a su parte plantearlas nuevamente. Agrega que al momento de hacerlo, la defensora mencionada, sin pudor ninguno, a la vista de todos los intervinientes en sala, en especial del recurrente y de la magistrada Gloria Calvo Godoy, faltando claramente a la ética profesional, simplemente realizó movimientos con su cabeza indicándole a la acusada qué responder en ambas oportunidades y, por consiguiente, ella finalmente lo hizo según lo indicado. Asevera que con el actuar de la defensora se ha afectado no solo la teoría del caso planteada, sino que ha influenciado



sustancialmente en el fallo de autos, toda vez que para su parte dichas respuestas podrían haber servido para acreditar la tesis alternativa planteada y demostrar la inocencia de su representado en juicio.

Indica que con la actuación antes descritos se ha afectado, además, el estándar de convicción establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal. Afirma que la participación culpable del acusado en los hechos que se le imputa, puede darse por establecida directamente o mediante indicios o presunciones judiciales, siempre que esa convicción tenga su punto de origen en supuestos fácticos plenamente probados, de acuerdo con la metodología impuesta por el artículo 297 del cuerpo legal citado. Adiciona que el tribunal se ha hecho cargo de las probanzas rendidas como corresponde, no obstante, si hubiese escuchado las respuestas de la coimputada sin que dicha prueba se hubiera visto viciada, no habría llegado al asentamiento de los hechos contenidos en el fallo recurrido, por el cual finalmente se condena a su representado.

Explicita, a continuación que tales equivocaciones le causaron a su parte un grave perjuicio al condenarlo por un delito por el que debió ser necesariamente absuelto, con la correcta convicción para acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado en el delito que se le ha imputado.

Sostiene, finalmente, que estos vicios han influido sustantivamente en lo dispositivo de fallo y sólo son salvables con el recurso de nulidad aquí intentado. Como corolario, pide anular el juicio oral y la sentencia, señalándose el estado en que debe quedar el proceso, y ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

**Segundo:** Que, enfrentados al arbitrio en examen resulta preciso apuntar que, sobre el concepto y definición de este tipo de recursos, la Corte Suprema ha expresado que “[...] es un medio de impugnación legal en favor de los intervinientes del juicio oral en razón del especial agravio que les provoca la sentencia, o su tramitación, al infringirse sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile, vigentes, en que se cometa una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo o se incurriera en algún motivo absoluto de nulidad expresamente reconocido por la ley, con el objeto que la respectiva Corte de Apelaciones o, excepcionalmente, la Corte Suprema cuando ello corresponda, anule el juicio



oral y la sentencia definitiva o solamente ésta. Se desprende de lo dicho que sus características fundamentales son las propias de un recurso extraordinario y de derecho estricto, en razón de los cuales se persigue la invalidación de la sentencia o del juicio oral o de ambos, sólo por causales expresamente definidas en la ley cumpliendo además algunas formalidades legales” (Rol Nro. 964-03).

**Tercero:** Que, sentado lo anterior, y en relación con la causal de anulación prevista en la letra e) del artículo 374 antes citado, corresponde observar la forma cómo la sentencia censurada se hace cargo de la exigencia que el legislador ha impuesto a la luz de lo que estatuyen los artículos 342 letra c) y 297 del Código que regla la materia.

Seguidamente, al realizar tal labor es posible advertir que en los raciocinios noveno y décimo del fallo, los sentenciadores se han ocupado de analizar la prueba rendida, fijando los hechos que se tienen por acreditados y estableciendo la calificación jurídica que corresponde a los presupuestos fácticos establecidos. A continuación, en el motivo undécimo, se concluye la participación del imputado, como coautor, en los hechos consignados, ocupándose los juzgadores de explicitar las razones por las cuales desechan la petición de absolución formulada por la defensa en relación con el ilícito en comento.

**Cuarto:** Que, como se sabe, el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal señala lo siguiente: “[m]otivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e)”; por su parte el artículo 342 letra c) dispone: “[l]a exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”. A su turno, el artículo 297 del Código Procesal Penal establece: “[v]aloración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el



señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.

Enseguida, de las normas transcritas se puede concluir que el vicio de nulidad invocado se produce cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: 1) cuando el tribunal omite señalar los hechos que se dan por probados o los antecedentes que permiten llegar a tal determinación; 2) cuando en el ejercicio anterior el tribunal infringe los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente asentados; 3) cuando los sentenciadores omiten valorar parte de la prueba rendida en el juicio; o, 4) cuando la fundamentación no permitiere reproducir el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en el fallo.

**Quinto:** Que, vale la pena recordar que, como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia, el recurso de nulidad estructurado en el Código Procesal Penal, según sea la causal invocada, tiene por objeto asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales –comprendidas en los artículos 373 letra a) y 374– o bien conseguir sentencias ajustadas a Derecho (artículo 373 letra b). Luego, tratándose de la primera finalidad, el arbitrio de invalidación no puede ser sede para debatir acerca del mérito de la prueba rendida y su valoración, cuestión privativa de los jueces del fondo, sino, exclusivamente, el cumplimiento de la diferentes garantías que el ordenamiento reconoce a los intervinientes. En ese entendido, la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, que se relaciona con la estructura sustancial de la sentencia, protege la garantía de la sentencia fundada, ya recogida en el artículo 1°, reiterada en el artículo 36 y desarrollada en los artículos 297 y 342 del mismo Código, y la razonabilidad de la misma, en la medida que la libertad de valoración de la prueba no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, como lo señala el artículo 297 del Código.

**Sexto:** Que, de este modo, la causal señalada en el considerando anterior tiene en nuestro derecho un doble objetivo: por una parte, el control del establecimiento de los hechos por parte del tribunal, en cuanto la libre



apreciación de la prueba tiene como límite la no contradicción de los principios de la lógica formal, las máximas de la experiencia humana y los conocimientos científicos establecidos; y, por otra, el cumplimiento por parte del tribunal del deber de motivar las sentencias, en términos que dicha motivación sea suficiente para explicar el razonamiento que los sentenciadores han utilizado en sus conclusiones. En este último sentido, además, la exigencia que la letra c) del artículo 342, en orden a que la valoración sea realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, impone a los jueces del juicio, de acuerdo al inciso segundo de esta disposición, el deber de analizar toda la prueba producida, incluyendo la que se ha desestimado, indicando las razones que se hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Seguidamente, como se puede apreciar, la obligación de fundamentación no sólo se refiere a los medios de prueba que sirven para el establecimiento de los hechos penalmente relevantes sino, además, con toda aquella prueba que se hubiere rendido, que se relacione con estos presupuestos fácticos o que forme parte de la teoría del caso de los intervinientes, de modo de explicitar a las partes el razonamiento que lleva al tribunal a desechar su prueba o alegaciones.

**Séptimo:** Que, en este entendido, por tanto, lo que esta Corte debe hacer en el caso de autos, de cara a dicho vicio de nulidad –y aun cuando el impugnante sostiene que los sentenciadores se han hecho cargo de las probanzas rendidas como corresponde, aserto que desde ya conllevaría a desestimar la configuración de la causal mencionada– es analizar si existe un razonamiento lógico del tribunal de la instancia en la sentencia censurada, satisfaciendo las exigencias que impone el Código Procesal Penal en esta materia.

Luego, y en tal dirección, debe analizarse especialmente lo expuesto en los considerandos noveno, décimo y undécimo de la sentencia recurrida, en los cuales –como se adelantó– los juzgadores abordan detalladamente la prueba rendida en juicio, arribando a la conclusión de que se encuentran probados los hechos objeto de la acusación y la participación que le cupo en éstos al imputado. Así, el fallo se hace cargo de todas las probanzas rendidas, las analiza y escruta, arribando de manera lógica y coherente a la conclusión condenatoria.

De lo expresado fluye que el fallo impugnado se ha ocupado de desarrollar los argumentos que sirven de basamento a la decisión que se



revisa, valorando las probanzas rendidas en los precisos términos que dispone el artículo 297 del Código Procedimental del ramo, esto es, con apego a los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los principios científicamente afianzados. Entonces, procede concluir que la sentencia censurada ha sido pronunciada en virtud de una completa y debida apreciación y valoración de la prueba vertida, sin que se adviertan deficiencias en la acreditación de los elementos del tipo investigado ni en la determinación de la participación del acusado, objetivos ni subjetivos.

**Octavo:** Que, en cuanto al principio de la no contradicción, debe anotarse que toda sentencia –en cuanto instrumento de expresión racional– está llamada a formar un todo armónico y coherente, un encadenamiento ordenado de ideas. Una misma cosa no puede ser y no ser a la vez. Por lo tanto, no resultan válidas ni aceptables las argumentaciones que se contrapongan. No es correcto sostener aseveraciones que no puedan coexistir porque, de acontecer ello, el discurso se torna vago, confuso, impreciso, dubitativo o simplemente desaparece. En este extremo y enfrentados a las argumentaciones vertidas en el fallo que se revisa y que han sido consignadas en los fundamentos que anteceden, debe concluirse que no surgen antinomias que tornarían, de existir, en imprecisa y vacilante la decisión.

Ciertamente, los razonamientos del fallo objetado han sido suficientemente claros y coherentes, en los precisos términos que exige el principio que se analiza, desde que el juzgador se ha ocupado de examinar las probanzas y en una secuencia racional, consecuente, comprensible y, en definitiva, lógica, concluyen sin que lo expresado en uno y otro razonamiento den cuenta de un contrasentido, restringiéndose a ponderar la prueba y a concluir la calificación jurídica, como se adelantó. Entonces, no se aprecia en el discurso contradicción alguna que reste credibilidad a uno u otro testimonio, ni a alguno cualquiera de los elemento de convicción latamente detallados en el fallo que se revisa, lo que sucede es que, en definitiva, a la defensa únicamente le molesta la situación que aduce ocurrió en la audiencia de juicio oral –y que atribuye a la abogada de la coimputada– lo cual le habría impedido, según asevera, contar con las respuestas de esta última, que aduce pudieron conllevar al asentamiento de hechos diferente y, en consecuencia, a una decisión también distinta de aquella a la que se arribó por los juzgadores.



**Noveno:** Que, en vinculación aún con el principio de la razón suficiente –que importa señalar que ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo– en lo que en este caso importa, aquél atañe a la necesidad de que en la sentencia se contengan los fundamentos que justifiquen racionalmente el juicio de hecho. Por lo mismo, se relaciona inescindiblemente con la falta de motivación. El imperativo de la fundamentación, en su forma más básica, impone el deber de examinar toda la prueba rendida. No solo aquella de la que se sirven los jueces para formar su convencimiento sino también la que esté dotada de una potencialidad capaz de relevar una hipótesis diferente, que pueda excluir la duda razonable o modificar la imputación. Así las cosas, la ausencia de justificación abarca los vacíos en el discurso, las inconsistencias en la argumentación, la falta de explicaciones para excluir o reafirmar una hipótesis. La motivación es insuficiente cuando “[...] no se justifica que los datos percibidos y tenidos por relevantes tienen entidad suficiente para fundamentar un juicio de fiabilidad o su contrario; o si los datos percibidos admiten más de una interpretación, no se justifica por qué se emplea un determinado criterio inferencial en lugar de otro alternativo también plausible” (Juan Igartua Salaverría “El Comité de Derechos Humanos, La Casación Penal Española y el Control del Razonamiento Probatorio”, Thomson/Civitas, Madrid, 2004, pp. 113–114).

Al observar la sentencia impugnada, no puede sino afirmarse que no se divisa, una ausencia de sustentación, siendo suficiente para arribar a tal conclusión lo que hasta ahora se ha reflexionado y, asimismo, la propia lectura de las razones dadas en el fallo objetado. En efecto, la decisión censurada explica y da razón de cómo arriba a la conclusión que se ha verificado el delito y que el acusado participó como autor del mismo. De manera que solo es posible concluir que los jurisdicentes procedieron a efectuar una exposición clara, lógica y completa de los hechos y circunstancias que se dieron por probados y, asimismo, cumplieron con la obligación de valorar los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el precepto citado, esto es, conforme a las exigencias y limitaciones que la sana crítica impone.

Como corolario, y de la manera que se ha anotado en los motivos precedentes resulta que el fallo impugnado se ha ocupado de desarrollar los





argumentos que sirven de basamento a la decisión que se revisa en la forma que exige el artículo 342, valorando las probanzas rendidas en los precisos términos que dispone el artículo 297, ambos del Código Procedimental del ramo, esto es, conforme a las exigencias y limitaciones que la sana crítica impone.

**Décimo:** Que, finalmente, resta hacer presente en relación con el reproche formulado por el recurrente –relativo a la conducta que asigna a la abogada defensora de la co-imputada durante la audiencia del juicio oral– que se trata de un comportamiento al cual no se le puede atribuir las características ni las consecuencias apreciadas por el reclamante. Adicionalmente, no resulta posible colegir como única conclusión y absoluta, que de haberse verificado tal conducta en la forma que narra dicha parte –lo que no consta a este tribunal– hubiera traído aparejadas las secuelas que aquel advierte. En efecto, no es posible aseverar, como lo hace el impugnante, que en el hipotético y eventual escenario de haber conseguido de la copartícipe respuestas diversas en relación con las dos preguntas que indica la defensa, ese solo hecho hubiere cambiado la convicción de los juzgadores y consecuente decisión correlativa. En suma, no se advierte la forma cómo se podría llegar a la conclusión que tal supuesto actuar podrían haber hecho variar la decisión.

La afirmación precedente conduce a cuestionar la existencia de un vicio que, de existir, pudiera influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo, exigencia esencial tratándose de este tipo de recursos.

**Undécimo:** Que, ahora bien, habiéndose abordado todos los posibles extremos en que podría situarse una contravención a la norma de anulación mencionada, los que han sido descartados, corresponde concluir haciendo mención, por así haberlo dispuesto la Excma. Corte Suprema a una posible causal de anulación de cara a lo que prevé la letra c) del artículo 374 citado.

En tal dirección cobra relevancia apuntar que, si bien la defensa aduce una conducta impropia durante la tramitación del juicio oral, omitió desarrollar debidamente la manera cómo ello le irroga un perjuicio. Y aun cuando en el texto de su libelo esgrime una causal diferente, tampoco en estrados argumentó –teniendo la oportunidad de hacerlo– sobre la posible concurrencia de esta causal o de aquella desarrollada en las reflexiones que preceden, insistiendo, en cambio, en aquel vicio que el máximo tribunal descartó de plano.



Con todo, esta causal de invalidación tampoco podría prosperar, por cuanto siendo de cargo del recurrente probar los hechos que la configuran, nada hizo al respecto. Así, la ausencia de algún elemento en tal sentido impide a estos sentenciadores determinar la veracidad de las alegaciones de la recurrente.

Consecuentemente, el recurso en estudio debe ser íntegramente desechado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 352, 372, 374, 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por Pablo Andrés Giuliucci Grayde, defensor penal privado, en causa RUC 2201312122-8, RIT 1-108-2023, seguida ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en contra de la sentencia definitiva de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés por la cual –en cuanto interesa– se condenó a BRYAN IVÁN JARAMILLO ARAYA a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, previsto en el artículo 3° en relación al artículo 1° de la Ley Nro. 20.000, acaecido el día 28 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, dicha sentencia no es nula.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la Ministra señorita Romy Grace Rutherford Parentti.

Nro. 5259-2023 (Reforma Procesal Penal).



Pronunciado por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P., Romy Grace Rutherford P. y Abogado Integrante Michael Christian Camus D. Santiago, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

